

**S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 24**  
**O R D I N A R I A**  
**LUNES 28 DE FEBRERO DE 2011**

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con cincuenta minutos del lunes veintiocho de febrero de dos mil once, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

El señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

**I. APROBACIÓN DE ACTA**

Proyecto de acta de la sesión pública número veintitrés ordinaria, celebrada el jueves veinticuatro de febrero de dos mil once.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dichos proyectos.

**II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS**

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el lunes veintiocho de febrero de dos mil once:

## II.1. 91/2007

Controversia constitucional 91/2007 promovida por el Presidente de la República por conducto del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Michoacán, demandando la invalidez del decreto 223 por el que se expide la Ley para la Conservación y Restauración de Tierras del Estado de Michoacán, en los artículos 10, 31, 32, 36, 37, 45, 46, 78, 85, 86 y 107. En el proyecto formulado por el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se sobresee en la controversia constitucional respecto de los artículos 32 y el denominado “107” de la Ley para la Conservación y Restauración de Tierras del Estado de Michoacán de Ocampo. TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 3, fracciones X y XXXI, 6, 7, 8, 9, 10, 11, fracciones I, II y III, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 36, fracciones I, inciso b), II y III, inciso a), 37, 45, 46, 47, 49, 78, 85, fracciones I, II, III y V y 86 de la Ley para la Conservación y Restauración de Tierras del Estado de Michoacán de Ocampo, en los términos señalados en los considerandos del séptimo al décimo tercero de esta ejecutoria. CUARTO. Se declara la invalidez de los artículos 3, fracción VII, 29, párrafo primero, 41 y 42*

Sesión Pública Núm. 24

Lunes 28 de febrero de 2011

*de la Ley para la Conservación y Restauración de Tierras del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Estado citado el nueve de octubre de dos mil siete, en los términos señalados en el considerando décimo cuarto de este fallo. QUINTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”.*

El señor Ministro ponente Aguirre Anguiano expuso una síntesis del considerando décimo tercero (páginas de la ciento setenta y nueve a la ciento ochenta y cuatro), en cuanto se propone reconocer la validez de los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, fracciones I, II y III, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 impugnados.

En el proyecto se propone en primer término, reconocer la validez de los artículos 6, fracción II y 9 de la Ley para la Conservación y Restauración de Tierras del Estado de Michoacán de Ocampo, porque no violan lo dispuesto en los preceptos 76, fracción I y 89, fracciones I y X, constitucionales, pues en ellos bajo ninguna óptica se faculta al Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa indicada, para intervenir directamente en la modificación o adición de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación en particular en África, en virtud de que de la interpretación armónica de los numerales 6, fracción II, y 9, fracción I, de referencia, con vista a lo dispuesto en los

artículos 13, fracciones IV, XVIII, XIX, XX, XXV y XXVI, y 139 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se advierte que la participación en cuestión se limita a la aplicación de dicha Convención en el territorio del Estado citado y dentro del ámbito de facultades del Gobierno local.

Asimismo en el proyecto se propone reconocer la validez del artículo 3º, fracción XXXI, de la Ley para la Conservación y Restauración de Tierras del Estado de Michoacán de Ocampo, pues si bien es cierto que el Poder Legislativo demandado, al establecer lo que debe entenderse por “Tierra”, no incluyó a los terrenos en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, también lo es que con ello no invade la esfera de competencia de la Federación; en primer lugar, porque la expresión de lo que debe entenderse por “Tierra” la limitó únicamente para los efectos de la Ley para la Conservación y Restauración de Tierras del Estado de Michoacán; luego, dicha expresión no puede utilizarse válidamente para entender otras leyes diversas a aquélla. En segundo término, porque con el establecimiento de lo que debe entenderse por “Tierra”, de ninguna manera se pretendió dar cumplimiento a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación en los Países Afectados por la Sequía Grave o Desertificación, en particular en África, en virtud de que en el artículo 3º, XXXI, transcrito no se advierte ningún elemento para producir la convicción de que con él se pretendió dar cumplimiento a dicha Convención, pues ni siquiera se hace alusión a ésta.

Importa resaltar que la regulación del sistema de la lucha contra la desertificación en el Estado de Michoacán, está diseñada para actuar en coordinación y concurrencia con el Sistema Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales.

Finalmente, los artículos 6, fracciones V, VI, VII, VIII, IX y XII, 11, fracciones I, V y VI, 19, 20, 21, 24 y 27, de la Ley para la Conservación y Restauración de Tierras del Estado de Michoacán de Ocampo, no violan el artículo 22, fracción IV de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, porque tales preceptos legales regulan cuestiones distintas al Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación.

Asimismo, informó que en las fojas ciento noventa y ciento noventa y uno del considerando en análisis se hizo alusión y se transcribieron las fracciones XVII y XXV del artículo 3º de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del corriente año, en donde se adicionó la fracción XVI al aludido artículo 3º, recorriéndose en su orden las demás fracciones, por tanto, las señaladas fracciones XVII y XXV pasaron a ser las fracciones XVIII y XXVI, respectivamente, cuyo contenido no se modificó y en nada influye en el sentido del presente proyecto, por lo que señaló que si este Pleno lo determinara así, en el engrose se

haría el ajuste en relación con el número que actualmente corresponde a las fracciones citadas del artículo 3º.

El señor Ministro Silva Meza señaló que el considerando décimo tercero está dividido en apartados a), b) y c), por lo que sometió a consideración del Tribunal Pleno que se aborde el estudio en la forma en que está estructurado.

La señora Ministra Luna Ramos mencionó que como lo expresó el señor Ministro ponente, en la parte de la contestación al inciso a), se basa en el criterio mayoritario al que éste hace referencia respecto del bloque de constitucionalidad de los tratados internacionales, y si bien se suprimió el considerando sexto, lo cierto es que al discutirlo una de las cuestiones que aceptó el señor Ministro ponente Aguirre Anguiano era eliminar esta parte.

Estimó que podría suceder lo mismo en este considerando, ya que se sostiene que la participación se limita a la aplicación de dicha Convención en el territorio local, como se establece en la página ciento ochenta y dos del proyecto, toda vez que conforme al criterio mayoritario de este Pleno, los Tratados Internacionales son ley Suprema de la Unión, por lo que la referida Convención tiene esa calidad; de manera que consideró que se suprimiera esta parte porque sería la base del análisis de este inciso, pues se sostendría que los tratados internacionales una vez

incorporados a la legislación interna, rigen para toda la República y tendrán la naturaleza de federales, con lo que no todos los señores Ministros están de acuerdo con que se le dé esa connotación, de manera que consideró que si se le diera ese tratamiento, no habría razón para discutir el criterio que con anticipación el señor Ministro ponente aceptó suprimir, por lo cual solicitó que se eliminara esa parte y se diera una respuesta diversa en el sentido de que los tratados tienen vigencia federal y que se pretende armonizar la legislación federal con la legislación estatal sin que implique una invasión de facultades.

El señor Ministro Cossío Díaz consideró que el uso de la expresión “bloque de constitucionalidad” es muy ambiguo, además de que técnicamente no debía emplearse como se hace en el derecho comparado, independientemente de que se estime que los tratados tienen una jerarquía superior a las leyes, ya que se trata de dos funciones normativas distintas.

En ese orden de ideas, consideró que al no ser una cuestión de utilidad, no debía emplearse dicha expresión en el caso concreto pues únicamente se sostiene que una vez firmado un tratado internacional, éste se incorpora al orden jurídico mexicano y la Federación y los Estados están obligados a acatarlo, por lo que no se federaliza la materia, sino que genera diversos compromisos entre la Federación y los Estados, derivado del carácter federal del sistema jurídico mexicano, considerando que si se simplifica el primer

punto del inciso a) del proyecto, éste quedaría más claro, por lo que manifestó que no tendría inconveniente en manifestarse a favor de esta parte de la propuesta con las supresiones indicadas, tal como las aceptó el señor Ministro ponente Aguirre Anguiano.

El señor Ministro ponente Aguirre Anguiano indicó que no tendría objeción en hacer las supresiones indicadas, estimando que tal situación pone al Tribunal Pleno en una situación de alerta, pues podría continuarse discutiendo en el vacío en estos temas si se suprimiera todo lo relativo al tratado internacional.

La señora Ministra Luna Ramos aclaró que lo que se debía suprimir sería la porción de la página ciento ochenta y dos del proyecto que señala: “Porque si de acuerdo al criterio actual mayoritario de este Tribunal Pleno, los tratados internacionales son la ley suprema de toda la Unión, es obvio que la Convención en comento tiene esa calidad”. Asimismo, consideró que se trata de un argumento adicional al señalar que la ley reclamada hace una aplicación del tratado exclusivamente en el ámbito local, lo que en el proyecto se sostiene como correcto, con lo que coincidió.

En ese tenor, consideró que en lugar de señalar el criterio de la mayoría que podría continuar en discusión, debía señalarse que cuando el tratado internacional se incorpora al derecho interno, debe ser respetado por la



Federación y por los Estados, por lo que sobre esa base se le otorga un tratamiento de una ley federal, recordando que la ley reclamada pretende, en coordinación con las leyes federales y con el citado tratado internacional, regular lo que le corresponde en su ámbito de competencial local.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea aclaró que lo que debía suprimirse era lo relativo al criterio de jerarquías, porque se acordó que no se analizaría, además de que no debía llevar al extremo de considerar al tratado, a la convención una ley federal, porque este Tribunal Pleno se estaría colocando en un criterio distinto.

Respecto de incluir o no la cuestión de bloque de constitucionalidad, recordó que se acordó que no se trataría desde que se retiró el considerando sexto.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia reiteró la propuesta de la señora Ministra Luna Ramos indicando que en la página ciento ochenta y dos del proyecto, se señala: “Convención en el territorio del Estado citado y dentro del ámbito de facultades del gobierno local”, lo que estimó correcto.

Respecto de lo propuesto por la señora Ministra Luna Ramos en el sentido de suprimir un párrafo, propuso el texto que podría sustituirlo que precisaría: “Convención en el territorio del Estado citado y dentro del ámbito de facultades

*Sesión Pública Núm. 24*

*Lunes 28 de febrero de 2011*

del gobierno local, puesto que una vez internado un Tratado, los gobiernos locales están obligados a observarlo e incluso a instrumentar su observación, una vez internado”, lo que podría incluirse al final del considerando que se estudia.

El señor Ministro ponente Aguirre Anguiano aclaró que debía indicarse que se trata de derecho interno.

Sometida a votación la propuesta modificada del inciso a) del considerando décimo tercero, en votación económica, se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a la consideración de los señores Ministros la propuesta contenida en el inciso b) del considerando materia de análisis.

El señor Ministro Cossío Díaz consideró que la solución podría ser semejante, tal como señaló el señor Ministro Ortiz Mayagoitia, recordando que en la página ciento ochenta y cinco del proyecto, ante el argumento de la parte promovente respecto a que toda la cuestión de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas son regulación exclusiva de la

Federación, se responde en la diversa ciento ochenta y siete en el sentido de que "... en segundo término porque con el establecimiento de lo que debe entenderse por tierra, de ninguna manera se pretendió dar cumplimiento a la Convención ... en virtud de que del artículo 3º, fracción XXXI, transcrito, no se advierte ningún elemento para producir la convicción de que con él se pretendió dar cumplimiento a dicha Convención, pues ni siquiera se hace alusión a ésta"; además de que posteriormente se da un diverso argumento.

Estimó que el tema es el que se precisó, que consiste en el hecho de que en una ley que regula el uso de las tierras y su mejoramiento, sin incluir a los bosques, no tiene por qué indicar que con ella se da cumplimiento a todos los tratados internacionales, ya que el hecho de que formen parte del derecho interno, implica una obligación para la legislatura local en términos de un Estado federal, de manera que cambiaría este argumento por el anterior, toda vez que tanto el gobierno federal como los gobiernos locales están obligados a cumplir con los tratados internacionales, lo que podría modificarse en el sentido del inciso a) que se votó anteriormente.

La señora Ministra Luna Ramos aclaró que el inciso b) se relaciona con la denominación que se da a la palabra "tierra", considerando que dentro de esa denominación no se incluyen los terrenos en zonas áridas, semiáridas y

subhúmedas, al estimarse que su regulación es facultad exclusiva de la Nación.

Recordó que en el proyecto se indica que en la definición de “tierra”, se excluye por completo a las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas, considerando que esta situación no debe ser la respuesta, ya que la fracción XXXI del precepto reclamado señala “Tierra. El sistema bioproductivo terrestre que comprende el suelo, la vegetación, otros componentes de la biósfera y los procesos ecológicos e hidrológicos que se desarrollan dentro del sistema, así como los acondicionamientos de los terrenos, la cubierta forestal y la infraestructura desarrollada en los terrenos rurales”; de donde se desprende que no se excluye situación alguna, lo que no implica que se trate de una norma inconstitucional, pues se elaboró de conformidad con lo previsto en el tratado internacional respectivo, que impone la obligación de “Promover la sensibilización y facilitar la participación de las poblaciones locales”, tal como lo hace la propia ley, además de que señala que “Los programas de acción nacionales deben especificar las respectivas funciones del gobierno y las comunidades locales”, así como que “Serán lo suficientemente flexibles a nivel local” y “Los gobiernos a todos los niveles”. En ese tenor, el tratado internacional establece esta situación; sin que la contestación que se presenta en el proyecto pueda ser que la ley reclamada esté excluyendo estos términos, sino que simplemente los está regulando en la parte de su

*Sesión Pública Núm. 24*

*Lunes 28 de febrero de 2011*

competencia local, en armonía con la demás legislación, sin que se esté ante una exclusión.

El señor Ministro ponente Aguirre Anguiano señaló que no tendría inconveniente en incorporar las observaciones de la señora Ministra Luna Ramos, considerando que se trata de cuestiones que faltaron de abordar en el proyecto.

Agregó que en relación con el artículo 3º y la fracción XXXI, de la ley impugnada, ello se aborda en la página ciento ochenta y seis del proyecto, lo que propuso interpretar conforme al artículo 1º de la misma ley, que en varios de sus párrafos se delimita exclusivamente a las tierras del Estado de Michoacán, al señalar como objeto de la ley “Combatir los procesos de degradación de las tierras en el medio rural y fomentar su restauración, mejoramiento y conservación con el fin de mantener su calidad y cantidad en beneficio de la población del Estado”; y “IV. Proteger el recurso del suelo y evitar el deterioro”, lo que consideró que se incluye en el proyecto; sin embargo, mencionó que si los señores Ministros prefieren que se suprima y se incluya el argumento señalado por la señora Ministra Luna Ramos, así lo haría.

El señor Ministro Pardo Rebolledo consideró que lo que genera estas imprecisiones es el planteamiento del concepto de invalidez, ya que la promovente se queja, por una parte, de que la ley impugnada al definir el concepto de tierra y excluir a las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas,

sostiene que como la regulación sobre este tipo de áreas es competencia de la Federación, invade la competencia federal; por lo que el planteamiento de inicio es contradictorio.

Estimó que la respuesta debía ser que ese concepto de tierra no debe ser tan limitado como para solamente referirse a lo que generalmente se conoce como tierra, ya que podrían ubicarse otros conceptos diversos dentro de ese término general; además de que existen dos niveles de regulación, el federal y el local.

En relación con lo señalado por el señor Ministro Cossío Díaz respecto de lo que se responde en el proyecto en el sentido de que no se pretende dar cumplimiento al tratado internacional, ésta es parte de la inconformidad que se alega, pues se sostiene que a través de dicha definición de tierra se pretende dar cumplimiento a la Convención de las Naciones Unidas, estimando que la respuesta del proyecto no permite suponer que esa disposición en concreto se establezca para dar cumplimiento a alguna disposición.

La señora Ministra Luna Ramos consideró que la solución se encuentra eliminando el segundo párrafo de la página ciento ochenta y siete, estimando que éste genera confusión, en tanto que respecto a si se hace o no en cumplimiento al Tratado, la respuesta se encuentra en el

artículo 1º, fracción II, del ordenamiento impugnado: “Las disposiciones de la presente ley, son de observancia general, orden público e interés social y tienen por objeto establecer bases para: II. Aplicar las disposiciones establecidas en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de Tierras en el Territorio del Estado”.

El señor Ministro ponente Aguirre Anguiano reiteró que ambos argumentos se encontraban en la página ciento ochenta y siete, párrafo segundo, que se pretende eliminar, el que señala: “El hecho de que el legislador demandado al establecer lo que debe de entenderse por tierra no haya incluido la árida, semiárida y subhúmeda, pone de relieve que respetó la competencia de la Federación para que sea ésta la que establezca lo que debe de entenderse por terrenos en zonas áridas, semiáridas y sub-húmedas”, con lo que consideró que se responde el planteamiento, en tanto que respecto del alegato relativo a la Convención de las Naciones Unidas, en el proyecto se indica: “Ni siquiera se hace alusión a ésta”, por lo que no debe perderse de vista que el legislador expresamente acotó que la definición de tierras sería únicamente para efecto de la ley invocada.

El señor Ministro Cossío Díaz insistió que lo indicado en la página ciento ochenta y siete tiene dos argumentos: uno, relativo a la cita expresa a la que se refería la señora Ministra Luna Ramos y, el segundo, de gran importancia, al

señalar que no porque un legislador local no mencione en sus leyes sobre una determinada materia, respecto de la cual el Estado Mexicano ha celebrado un tratado internacional, ello implica que éste no tenga obligación para su cumplimiento, sino que se está obligado por éstos, por lo que consideró que en lugar de dar una respuesta negativa, debía incluirse la respuesta haciéndole frente a los compromisos que el Estado Mexicano ha planteado. Preciso que si se tratara de un tema estrictamente forestal se estaría ante una problemática distinta pues se tendría que separar la parte estrictamente federal de los bosques respecto de las materias locales; sin embargo, en el caso concreto se está ante un asunto de tierras, el cual, en lo que se refiere la ley del Estado y el tratado internacional, no es materia exclusiva de la Federación.

En ese orden, consideró que al celebrarse un tratado para mejorar las condiciones de este tipo de tierras, los Estados se obligan independientemente de que así se mencione en el tratado respectivo, lo que propuso que se ajustara en el proyecto respectivo, respecto de lo cual el señor Ministro ponente Aguirre Anguiano manifestó que en el proyecto únicamente se sostiene que el legislador no tomó en cuenta el tema, lo que es una cuestión diferente.

La señora Ministra Luna Ramos precisó que en la página ochenta y siete se indica: “De ninguna manera se pretendió dar cumplimiento a la Convención de las Naciones



Unidas de lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en África, en virtud de que del artículo 3º, fracción XXXI, transcrito, no se advierte ningún elemento para producir la convicción de que con él se pretendió dar cumplimiento a dicha Convención, pues ni siquiera se hace alusión a ésta”, lo que sí se indica en el artículo 1º, ya que el hecho de que se señale o no, implica que de cualquier manera se está cumpliendo con el tratado; considerando que debía modificarse dicho aserto.

Señaló que el siguiente párrafo indica: “Además, el hecho de que el legislador demandado al establecer lo que debe entenderse por tierra, no haya incluido los terrenos en zonas áridas, semiáridas o subhúmedas”, implica que no son materia de la ley respectiva, recordando la definición que en ésta se da para el concepto de tierra, por lo que consideró que no se excluye, indicando lo señalado en la parte final del párrafo anterior al que dio lectura en el sentido de que señala que “para los efectos de la ley local...”, cuya redacción podría implicar cierto tipo de confusión.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea consideró importante descifrar la cuestión planteada porque el concepto de invalidez es confuso y es contradictorio, ya que, por un lado, se refiere a que el Estado está aplicando la Convención Internacional y, por otro, pretende que esa situación federalice la materia que es materia de la

Convención que se aceptó que tiene incidencia a nivel federal y nivel local, considerando irrelevante que el Estado señale o no que lo está haciendo en cumplimiento de una Convención internacional, sino que basta que se trate de una materia en la cual incida la Convención en comento para que se pueda realizar el análisis respectivo.

Consideró que contrario a lo que afirma la actora, las leyes generales permiten en este tema la intervención de la Federación y de los Estados; de manera que si se interpreta que las conceptualizaciones a que se refiere la legislación impugnada, son a las tierras sobre las cuales válidamente tiene jurisdicción en el estado de Michoacán porque así se ha aceptado, la respuesta debía darse en el sentido de la sustancia y, toda vez que en el concepto de invalidez se está haciendo valer esta situación, la cuestión efectivamente planteada guarda relación tanto con la Convención como con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se desprende la posibilidad de que existan tierras sobre las que sí tiene jurisdicción y puede legislar válidamente el Estado de Michoacán.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia compartió las consideraciones visibles en las páginas doscientos dieciséis y doscientos diecisiete en el sentido de que los numerales combatidos no desarrollan ni regulan el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y Degradación de los Recursos Naturales; sin embargo, destacó que conforme al

sistema de distribución concurrente y coordinado de competencias, la aplicación del Sistema Nacional por parte de las entidades federativas es posible a través del acuerdo de coordinación que para tal efecto se emita por parte de la Federación y del Estado de Michoacán a fin de ejecutar los programas en materia forestal, lo que significa que mientras el Estado actúe dentro de los límites de su competencia, puede aplicar la Convención Internacional en comento sin afectar competencias federales.

Agregó que de la lectura de los Lineamientos Generales de Operación del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y Degradación de los Recursos Naturales se desprende que aquél es un mecanismo de concurrencia y coordinación de funciones de las instituciones públicas y de los organismos sociales y privados que inciden en los temas enunciados y se integra entre otros órdenes de gobierno, por el federal, por los estatales cuyos objetivos consisten en contener y revertir la desertificación, actuando prioritariamente en regiones cuyo ecosistema esté más afectado en este proceso a través de Programas Integrales de Recuperación e Impulso a la Producción Sustentable, además de que se precisa que el citado sistema establece facultades para actuar en todo el país y que el mecanismo de coordinación y concertación de acciones del propio sistema estará integrado por instancias de colaboración auxiliares de la Comisión Intersecretarial del Consejo Mexicano y de los Consejos Estatales para el Desarrollo

Rural Sustentable, por lo que se está en presencia de un mecanismo coordinado de planeación y ejecución en el que participan tanto la Secretaría de la Administración Pública Federal correspondiente, como los gobiernos estatales; que guarda relación con la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, lo que es de derecho interno y debe ser reconocido y aplicado por los componentes de la Federación.

Señaló que igualmente se reclamó el artículo 26 de la ley impugnada, respecto del que no se hace ningún comentario ni se reconoce su validez, por lo que propuso agregarlo.

Señaló coincidir en que existe una clara manifestación de la legislatura local de Michoacán relativa a que entre los objetivos de la ley impugnada se encuentra la aplicación de las disposiciones establecidas en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y la Degradación de Tierras en el Territorio del Estado, por lo que estimó que estas disposiciones no son violatorias de la Constitución Federal.

El señor Ministro ponente Aguirre Anguiano recordó que a Madero y a Pino Suárez los fusilaron en Lecumberri porque salieron quince minutos antes del cambio de guardia en Palacio Nacional, por lo que de no haberlo hecho así, no

los hubieran fusilado, de manera que consideró que se estaba llegando anticipadamente al análisis del inciso c) del considerando décimo tercero.

Estimó que se trata de dos puntos concretos, sin discutir que la aplicación del tratado también incumbe al Estado, y recordando que los promoventes se duelen de que se pretende dar cumplimiento a la convención en el artículo 31, respondiéndose que dicha pretensión no se prevé en la fracción impugnada.

En relación con el alegato de la promovente relativo a la competencia de la Federación, precisó estar de acuerdo con los señores Ministros Zaldívar Lelo de Larrea y Pardo Rebolledo, pues se señala que se invaden atribuciones de la Federación porque en las disposiciones se excluye la materia federal, considerando que así es como se está respondiendo, por lo que no lo consideró inconsecuente sino lacónico, precisando que no tendría inconveniente en agregar al engrose los argumentos que consideraran necesarios los señores Ministros.

Sometida a votación la propuesta modificada del proyecto contenida en el inciso b) del considerando décimo tercero, se aprobó, en votación económica, por unanimidad de votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández,

*Sesión Pública Núm. 24*

*Lunes 28 de febrero de 2011*

Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

En relación con el apartado c) del considerando décimo tercero, el señor Ministro ponente Aguirre Anguiano recordó que el señor Ministro Ortiz Mayagoitia señaló que no se hace referencia en el proyecto al artículo 26 impugnado, ante lo cual, el referido señor Ministro Ortiz Mayagoitia precisó que sí se cita y se transcribe; sin embargo, cuando se reconoce su validez no se le incluyó en el punto resolutivo respectivo, proponiendo que se sobreseyera en relación con éste, sin que se hiciera una declaración de validez al respecto, lo que se aceptó por el señor Ministro Aguirre Anguiano.

Sometida a votación la propuesta modificada del apartado c) del considerando décimo tercero, se aprobó, en votación económica, por unanimidad de votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

El señor Ministro ponente Aguirre Anguiano expuso una síntesis del considerando décimo cuarto (páginas de la doscientos diecisiete a la doscientos veintitrés), en cuanto se propone declarar la invalidez de los artículos 3, fracción VII, 29, párrafo primero, 41 y 42 de la Ley para la Conservación y

Restauración de Tierras del Estado de Michoacán, toda vez que dichos preceptos contravienen lo dispuesto en el artículo 27, fracción XX, constitucional en relación con los preceptos 14, 15 y 16 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, porque invaden el régimen de atribuciones de la Federación en materia de instrumentación del Programa Especial Concurrente, dado que pretenden regular el acceso de la población a los recursos federales que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal destinan para el Programa Especial concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

El señor Ministro Cossío Díaz manifestó interrogantes respecto de la invalidez de los referidos preceptos, específicamente en el octavo concepto de invalidez donde se argumenta que transgreden lo dispuesto en el artículo 27, fracción XX, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable porque invaden el régimen de atribuciones de la Federación en materia de instrumentos de programación especial concurrente, al pretender regular el acceso de la población a los recursos federales que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal destinan para el programa especial concurrente para el desarrollo sustentable.

Precisó que el artículo 3, fracción VII, impugnado, define los contratos de aprovechamiento de tierra como el instrumento legal regido por la legislación administrativa aplicable, mediante el cual el gobierno federal y el Estado se comprometen a dar acceso a los productores contratantes

en una gestión única, a los apoyos disponibles en los programas de las dependencias y entidades participantes en el programa especial concurrente, a cambio de los cuales, los productores contratantes se comprometan a ejecutar un plan de manejo de sus tierras.

Señaló que el artículo 29 impugnado, se refiere al aprovechamiento de tierras de pastoreo respecto de las cuales se opte por establecer contratos de aprovechamiento de tierras, para lo cual se presentará a la Secretaría un plan que les autorice apoyos para el manejo de tierras; el artículo 41, párrafo tercero, prevé que el Consejo estatal, en coordinación con las dependencias competentes de los diversos órdenes de gobierno, aportarán asesoría calificada a los productores, a fin de formular sus planes y contratos; en tanto que el diverso 42 sostiene que cuando se trate de tierras frágiles el Consejo intervendrá en la concertación de los contratos de aprovechamiento de tierra.

En ese orden, consideró que se está ante un problema semejante al de los conceptos anteriores, en el que la ley impugnada solamente menciona como un supuesto de remisión al referido programa, el cual está establecido y contemplado en su totalidad en las diversas Ley Forestal Estatal y Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y en los artículos 123 de la legislación local y 126 de la legislación federal; considerando que el proyecto hace un análisis de los artículos impugnados de manera aislada, lo



que no permite tener una apreciación integral del problema, estimando que no se puede apreciar de qué manera una legislación estatal como el caso de Michoacán pueda someter a la Federación para que ésta otorgue recursos presupuestales.

Señaló tener dudas respecto de si es posible declarar la inconstitucionalidad de los cuatro preceptos impugnados a partir sólo de un análisis aislado de esta legislación y no de incorporar el resto de los preceptos que establecen un sistema, considerando que en la ley local se señala que habrá diversos programas; cuestionándose qué sucederá si los programas aprobados por otro tipo de legislaciones, como en el caso de la impugnada, establecen direccionamientos establecidos en otros ordenamientos, surgiendo la interrogante respecto de si es inconstitucional una ley local que direcciona los recursos que están contruidos y contemplados en diversas legislaciones, precisando que no cuenta aún con una posición definitiva sobre el particular, respecto de la inconstitucionalidad de los preceptos si se analiza el sistema integralmente.

La señora Ministra Luna Ramos precisó que las razones por las que se declara la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados se encuentran en la página doscientos veintidós del proyecto, y consisten en que el artículo 3º, fracción VII, “instituye el contrato de aprovechamiento de tierras y se compromete al gobierno

federal a dar acceso a los productores contratantes a los apoyos disponibles en los programas de dependencias y entidades participantes en el programa especial concurrente”; imponiendo al gobierno federal la obligación de que a la firma de un contrato de aprovechamiento de tierras realice determinada aportación en el marco del programa citado, lo que no podría ser materia de la legislación local sino de la federal; sin embargo, estimó que el problema fundamental que se presenta consiste en que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 23, prevé: “El federalismo y la descentralización de la gestión pública serán criterios rectores para la puesta en práctica de los programas de apoyo para el desarrollo rural sustentable”, en tanto que el párrafo cuarto del referido artículo señala: “Las dependencias y entidades de la administración pública federal darán curso a sus acciones con base en lo previsto igualmente en el Plan Nacional de Desarrollo y el programa especial concurrente, con atención prioritaria a las zonas de mayor rezago económico y social, ajustándose a lo que ordena la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás ordenamientos legales vigentes”.

Señaló que el artículo 24 impugnado prevé: “Con apego a los principios de federalización, se integrarán los consejos para el desarrollo rural sustentable, homologados al Consejo Mexicano en los Municipios, en los Distritos de Desarrollo Rural y en las entidades federativas. Los convenios que celebre la Secretaría con los gobiernos de las

entidades federativas, preverán la creación de estos convenios”, precisando que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece la posibilidad de determinar los programas especiales concurrentes a que se refiere el artículo 3° impugnado.

Agregó, que en el Estado de Michoacán se creó el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Integral Sustentable con base en la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Michoacán y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; agregando que existe un Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable celebrado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Michoacán, que establece la posibilidad de crear los programas especiales concurrentes en coordinación con la Federación y los Estados, a través de convenios de coordinación y del Consejo Estatal, los cuales fueron previamente establecidos.

Precisó que no se puede sostener que de acuerdo al análisis aislado de los preceptos impugnados éstos sean inconstitucionales porque obligan a hacer algo que solamente puede realizar el Congreso de la Unión en relación con las obligaciones que se puede tener respecto de los particulares, es decir, las dependencias federales respecto de los particulares, pues existe una armonía entre la legislación federal y la local, señalando que no encuentra argumentos para declarar la inconstitucionalidad de los

preceptos ni tampoco una invasión a la competencia de la Federación cuando se cumple con la facultad que en ciertas partes es concurrente, y que donde no existe concurrencia, la ley determina la existencia de convenios con los cuales el propio Estado está cumpliendo para efectos de darle operatividad a estos artículos.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia recordó que el artículo 3, fracción VII, impugnado, define los contratos de aprovechamiento; el diverso 29, señala: “Quienes aprovechen tierras de pastoreo y opten por establecer contratos de aprovechamiento de tierra, presentarán a la Secretaría para la autorización de apoyos, un plan de manejo de tierras conforme a las recomendaciones técnicas aprobadas en los términos de esta ley, y la normatividad aplicable... Los ejidos y quienes cuenten con superficies con capacidad para menos de cincuenta unidades podrán solicitar...” estando presente la participación de los distintos niveles de gobierno, en tanto que el artículo 41 sostiene que “El Consejo diseñará los mecanismos idóneos para la instrumentación de los contratos de aprovechamiento de tierra. Los contratos incluirán los apoyos necesarios para la aplicación de los planes del manejo de tierras ... congruentes con la zonificación y ordenamiento formulado por el Ayuntamiento, con la participación del Consejo Municipal... El Consejo, en coordinación con las dependencias competentes de los diversos órdenes de gobierno aportará asesoría calificada a los productores”, de

donde se desprende que no existe un compromiso unilateral del gobierno del Estado de Michoacán que comprometa al gobierno federal a aportar recursos económicos ni asesoría técnica; los cuales deben ser importantes en su significado de acciones, sin referirse al monto económico, recordando que estas aportaciones federales son voluntarias y se obtienen a través de la coordinación del programa correspondiente, para lo cual deben intervenir los diversos órdenes de gobierno, conforme a las disposiciones de la normativa impugnada y de las demás disposiciones aplicables, por lo que manifestó que estaría por el reconocimiento de validez y porque expresamente se mencione en este reconocimiento al artículo 42 impugnado.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se manifestó en la misma línea que los señores Ministros Luna Ramos, Ortiz Mayagoitia y Cossío Díaz, agregando algunos argumentos que fortalecerían estas consideraciones.

Precisó que no se está confrontando la normativa impugnada con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, sino que se trata de una cuestión de desarrollo rural que parte del artículo 27, fracción XX, de la Constitución General; indicando que esta materia no está prevista técnicamente como reservada a la Federación, ni que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establezca una distribución competencial entre Estados y Federación, como sucede respecto de otros ordenamientos analizados en la

presente controversia constitucional, sino que prevé en sus artículos 19 y 23 a 28, mecanismos de coordinación para la suscripción de convenios, creación de Consejos estatales y municipales, así como el compromiso de las entidades federativas para promover regulaciones congruentes y acordes con la legislación nacional en materia de desarrollo rural sustentable.

En ese tenor, estimó que existe una coordinación o programa especial concurrente previsto en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que establece que su finalidad consiste en promover diversas acciones en el ámbito de desarrollo rural en coordinación con las entidades federativas mediante la asignación de recursos presupuestales del gobierno federal destinados a distintos programas de apoyo, por lo que la ley en su artículo 28 se refiere específicamente a que en los convenios de coordinación con las entidades federativas se establecerán mecanismos y figuras asociativas para la administración de los recursos presupuestales federales y que en tales mecanismos y figuras asociativas participarán los gobiernos de las entidades federativas y los Municipios.

Asimismo, indicó que el artículo 34 de Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable de la entidad regula los contratos de aprovechamiento de tierras, y prevé que los apoyos provenientes del gobierno estatal y los apoyos federales que éste administre de acuerdo con sus

correspondientes reglas de operación y en función de un plan de manejo de tierras, tendrán por objeto facilitar y democratizar el acceso a estos apoyos públicos, por lo que los contratos de aprovechamiento a que se refiere la ley impugnada, son los señalados en este numeral, agregando que a través de éstos se da acceso a los recursos estatales y federales administrados por la propia entidad federativa dentro del marco del programa especial concurrente, en el cual existen recursos federales que son administrados por las entidades federativas a través de los denominados fideicomisos de fomento agropecuario.

Por ende, manifestó que en la medida en que los contratos de aprovechamiento de tierras constituyen instrumento para el acceso a los recursos estatales, así como a los recursos federales que corresponden administrar a las entidades federativas, debe reconocerse la validez de los artículos impugnados.

El señor Ministro ponente Aguirre Anguiano consideró interesantes las intervenciones de los señores Ministros en el sentido de que se deben interpretar de manera sistemática los preceptos impugnados. Recordó que las leyes federales que mencionan atribuciones de los otros órdenes de gobierno, normalmente son las leyes marco, surgiendo la interrogante respecto de qué sucede si en una partitura, determinada legislación de los Estados mete a toda la orquesta sin presuponer situaciones de hecho, considerando

que si la propia ley estableciera que sucedidos determinados eventos propios de la autoridad federal, deberá de obrarse en esta forma, lo consideraría correcto; pero si no involucra el advenimiento de los supuestos de hecho, consideró que difícilmente se podría elaborar una interpretación como sistema, pues se parte de hipótesis, lo que estimó delicado, pues si se partiera de supuestos de hecho, no habría problema en hacer la interpretación como sistema, pero precisó que la ley debe ser previsor, y partiendo de hipótesis, es complicado hacer una interpretación como sistema, indicando que no tendría inconveniente en acatar las indicaciones del Tribunal Pleno siempre que se analice la situación con toda claridad y que se haga una interpretación conforme, estimando complicado suponer que si las normas se interpretan en consonancia con otras, presuponiendo que los eventos que prevén ya acaecieron, entonces, serían constitucionales, sin que repruebe esta afirmación.

El señor Ministro Valls Hernández consideró que los preceptos impugnados invaden la esfera federal toda vez que comprometen al gobierno federal para que actúe en determinado sentido, considerando que una norma local no puede contener aspectos que vinculen la actuación del nivel federal; pues sólo compete hacerlo a la ley general de la materia. Por tanto, se manifestó de acuerdo con el proyecto y con el último razonamiento planteado por el señor Ministro ponente Aguirre Anguiano.



El señor Ministro Franco González Salas consideró que los preceptos impugnados son constitucionales, estimando razonable la propuesta relativa a ubicarlo como una interpretación conforme para darle mayor seguridad.

Además, formuló dos observaciones: La primera relativa a que la impugnación se reclama con la fracción XX del artículo 27 constitucional, estimando que se trata de una situación importante pues aparentemente lo que se trata de precisar no es tan claro como parecería; recordando que se trata de sostener que es violatorio de lo previsto en la citada fracción XX porque ésta otorga facultades a la Federación en esta materia que no son respetadas, estimando que esta fracción no alude a la Federación, sino al Estado, lo que debía entenderse en el sentido de que conforme a la distribución de competencias que se realiza de acuerdo con la Constitución, intervienen las distintas autoridades y los distintos órdenes de gobierno.

La segunda observación la hizo en relación con la impugnación a los citados artículos 14, 15 y 16, la que consideró salvable a través de la propuesta del señor Ministro ponente Aguirre Anguiano respecto de hacer una interpretación conforme para señalar que debe entenderse a la luz de la distribución de competencias y de la concurrencia, así como de los esquemas planteados en las leyes federales o generales, recordando que los tribunales constitucionales deben procurar preservar la validez de los

*Sesión Pública Núm. 24*

*Lunes 28 de febrero de 2011*

ordenamientos jurídicos expedidos por el legislador democrático.

El señor Ministro Pardo Rebolledo manifestó que durante la sesión escuchó atentamente los planteamientos de los señores Ministros que se pronunciaron por la validez del artículo 3º, fracción VII, impugnado.

Al respecto, manifestó que le surgen interrogantes sobre si se está haciendo derivar la constitucionalidad del precepto de la interpretación de otras leyes, lo que podría suceder, cuestionándose qué sucedería si esas otras leyes se modifican o se derogan.

Estimó que cuando se habla de comprometer al gobierno federal en el tema de los contratos de aprovechamiento de tierras, se establece un compromiso a un nivel distinto del que está regulando y, en esa medida, consideró que podría sustentarse la invalidez que propone el proyecto.

El señor Ministro Aguilar Morales se manifestó de acuerdo con el proyecto, específicamente con el tema referente a la invalidez del artículo 3º impugnado, sin coincidir en realizar una interpretación conforme, sino sistemática, estimando que las disposiciones de una legislatura estatal no deben hacer ningún pronunciamiento

respecto de compromisos o conductas que asuman autoridades federales, pues no son parte de su competencia.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas se pronunció en el mismo sentido que los señores Ministros Valls Hernández, Pardo Rebolledo y Aguilar Morales, pues estimó que el artículo 3° impugnado impone ciertas obligaciones al gobierno federal, cuando una ley local no lo puede realizar, porque es materia únicamente del Congreso de la Unión, y así está sustentado precisamente el proyecto en esta declaratoria de inconstitucionalidad.

La señora Ministra Luna Ramos recordó que el citado artículo 3° establece: "Para los efectos de esta ley se entenderá por contratos de aprovechamiento de tierras, instrumento legal regido por la legislación administrativa aplicable mediante el cual el gobierno federal y el del Estado, se comprometen a dar acceso a los productores contratantes en una gestión única a los apoyos disponibles en los programas de las dependencias y entidades participantes, en el programa especial concurrente, a cambio de lo cual los productores contratantes se comprometen a ejecutar un plan de manejo de sus tierras", aclarando que lo que se entiende por plan único es una ventanilla única donde se eleven las solicitudes de las personas que tienen este tipo de tierras y donde en un momento dado se hagan las gestiones para los apoyos estatales y federales, por lo que lo pretendido es una simplificación; y, por otro lado, que tampoco se puede perder

de vista que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, también establece en el artículo 53: “Los gobiernos federales y estatales estimularán la reconversión en términos de estructura productiva sustentable, incorporación de cambios tecnológicos y de procesos que contribuyan a la productividad y competitividad del sector agropecuario, a la seguridad y soberanía alimentarias y al óptimo uso de las tierras, mediante apoyos e inversiones complementarias, el gobierno federal, a través de la Secretaría competente, podrá suscribir con los productores individualmente u organizados, contratos de aprovechamiento sustentable de tierras definidos regionalmente”, de lo que se desprende la forma de suscribir un programa regional si no se establece a través de la legislación aplicable la existencia de estos programas. Por su parte, el artículo 165 establece: “La convergencia de los gobiernos federal, estatal y municipal, cuando así se convenga”; donde el convenio está firmado entre el gobierno federal y el estatal; es decir, se sigue el mismo sistema de desarrollo en toda la ley, en donde existen posibilidades de que ambos niveles de gobierno puedan regular armonizando su participación.

Agregó que la propia ley federal establece en el citado artículo 3º, cuál es la definición del programa estatal concurrente, el cual está determinando los programas sectoriales y cómo se van a llevar a cabo, dando la intervención a los gobiernos de los Estados.

El señor Ministro Cossío Díaz manifestó coincidir con el señor Ministro Aguilar Morales en que no es una interpretación conforme, sino una interpretación sistemática, aunque se den conclusiones distintas; además afirmó que éste no es un caso de constitucionalidad directa, pues no se enfrenta la ley a ningún precepto de la Constitución, sino precisamente a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y a otras leyes, por lo que la función de las distintas leyes abordadas es conformar un sistema con una función normativa diferenciada y, por tanto, se manifestó en contra del proyecto y por la validez de los cuatro preceptos impugnados.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se manifestó en el mismo sentido, estimando innecesaria una interpretación conforme sino una interpretación sistemática, que conforma todo un sistema normativo que parte de la Constitución, leyes generales, leyes federales, la ley local, e incluso, normas de carácter internacional, con preceptos legales de distinto rango y operatividad.

El señor Ministro Aguilar Morales estimó preocupante el comentario relativo a que lo que se está creando es una ventanilla única, pues la Legislatura del Estado no puede señalar a la Federación reglas sobre la recepción de solicitudes que se le formulen; asimismo, consideró que el artículo 3º, aunque puede resultar inconstitucional, ni siquiera tendría un efecto contundente en la aplicación de las

*Sesión Pública Núm. 24*

*Lunes 28 de febrero de 2011*

normas en general, porque se trata de una simple definición, estableciendo ciertos conceptos para la claridad de la interpretación de la ley.

Agregó que con seguridad la legislatura podría corregir la redacción de los preceptos si se declaran inconstitucionales y no en una interpretación sistemática, por lo que estaría con el proyecto con la inconstitucionalidad de esta fracción.

El señor Ministro ponente Aguirre Anguiano consideró no estar de acuerdo con la interpretación sistémica propuesta, pues ésta se aplica cuando una norma es el eslabón de una cadena y los otros eslabones son otras que juntándose la forman y le dan una solvencia, pero en el caso no se puede realizar una interpretación sistémica, cuando los otros eslabones hablan de posibilidades de hecho que pueden o no darse.

El señor Ministro Presidente Silva Meza se manifestó en contra del proyecto, pues se convenció de que a través de una interpretación armónica o sistemática se resolvería el problema en virtud de que si se analiza el marco normativo aplicable que, en materia federal, regula los contratos de aprovechamiento sustentable de tierras y se inscribe en el desarrollo rural y sobre todo en toda la normativa relativa a la asignación de los recursos, se debe llegar a la conclusión de

que la asignación de los recursos debe realizarse a través de los programas sectoriales concurrentes.

Sometida a votación la propuesta del considerando décimo cuarto del proyecto, por mayoría de nueve votos de los señores ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza, se reconoció la validez de los artículos 29, párrafo primero, 41 y 42 de la Ley para la Conservación y Restauración del Estado de Michoacán. Los señores Ministros Aguirre Anguiano y Sánchez Cordero de García Villegas votaron por la invalidez de dichos numerales; asimismo, por mayoría de seis votos de los señores Ministros, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza se reconoció la validez del artículo 3º fracción VII, del mismo ordenamiento. Los señores Ministros Aguirre Anguiano Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández y Sánchez Cordero de García Villegas votaron por la invalidez de dicho numeral.

El señor Ministro Aguirre Anguiano propuso hacerse cargo del engrose y reservó su derecho de emitir voto particular.

*Sesión Pública Núm. 24*

*Lunes 28 de febrero de 2011*

A propuesta de los señores Ministros Silva Meza y Ortiz Mayagoitia se determinó que los puntos resolutiveos de esta controversia constitucional son del siguiente tenor:

“PRIMERO. Es parcialmente procedente pero infundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se sobresee en la presente controversia constitucional respecto de los artículos 26, 32 y el denominado “107” de la Ley para la Conservación y Restauración de Tierras del Estado de Michoacán. TERCERO. Con la salvedad indicada en el resolutiveo que antecede, se reconoce la validez de los restantes artículos impugnados en la presente controversia constitucional, en los términos señalados en los considerandos del sexto al décimo tercero de esta ejecutoria. CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos indicados.

A las doce horas con veinticinco minutos el señor Ministro Presidente Silva Meza decretó un receso y la sesión se reanudó a las trece horas con diez minutos.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con lo siguiente:



**II. 2. 862/2010**

Incidente de inejecución 862/2010 de la sentencia dictada el trece de enero de dos mil diez por los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el juicio de amparo D. T. 1024/2009, promovido por \*\*\*\*\*. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Fernando Franco González Salas se propuso: “*PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia a que este toca se refiere. SEGUNDO. Queda inmediatamente separado de su cargo el Presidente de la Junta Especial Número Ocho Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje. TERCERO. Consígnese a la persona mencionada en el punto resolutivo que antecede, directamente ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal en turno, por el desacato a una sentencia de amparo de acuerdo con lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a fin de que sea juzgado y sancionado por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 208 de la Ley de Amparo. CUARTO. Para los efectos mencionados en el último considerando de esta resolución, déjese el presente incidente de inejecución de sentencia abierto y requiérase a la autoridad ahí señalada el cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos especificados*”.

El secretario general de acuerdos indicó que el veinticinco de febrero del año en curso se recibió oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje al que

acompaña proveído dictado para dar cumplimiento a la sentencia de amparo respectiva.

El señor Ministro Franco González Salas manifestó que se le informó del referido oficio, por lo que conforme a los criterios de este Tribunal Pleno, podría considerarse que existe un principio de cumplimiento de la ejecutoria respectiva.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se retiraba en los términos indicados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con lo siguiente:

**II. 3. 1137/2010**

Incidente de inejecución 1137/2010 de la sentencia dictada el 20 de enero de 2010 por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 1216/2009 promovido por \*\*\*\*\*, albacea definitivo de la Sucesión Intestamentaria a bienes de \*\*\*\*\*. En el proyecto formulado por la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas se propuso: “PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia a que este toca se refiere. SEGUNDO. Quedan inmediatamente separados de sus cargos: 1. \*\*\*\*\*, Administrador Tributario en “San Borja”, 2. \*\*\*\*\*, Subtesorero de Administración Tributaria, y 3. \*\*\*\*\*, Tesorero del Distrito Federal. TERCERO. Para los efectos

*Sesión Pública Núm. 24*

*Lunes 28 de febrero de 2011*

mencionados en la parte final del penúltimo considerando de esta resolución, el incidente de inejecución de sentencia queda abierto”.

Asimismo informó que el veinticuatro de febrero del año en curso se recibió oficio suscrito por el Administrador Tributario en San Borja al que se acompaña documento que da cumplimiento a la sentencia respectiva, por lo que se podría dar el mismo tratamiento que al asunto anterior.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se retiraba en los términos indicados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

#### **II. 4. 1170/2010**

Incidente de inejecución 1170/2010 de la sentencia dictada el 26 de mayo de 2009, por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo 704/2009-CM promovido por \*\*\*\*\*. En el proyecto formulado por el señor Ministro Luis María Aguilar Morales se propuso: “PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia a que este toca se refiere. SEGUNDO. Quedan inmediatamente separados de sus cargos: \*\*\*\*\*, Tesorera Municipal, y \*\*\*\*\*, Presidente Municipal, ambos del Municipio de Temixco, Estado de Morelos, por haber incumplido la sentencia constitucional de

veintiséis de mayo de dos mil nueve, dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo 704/2009, en los términos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Consígnese a las personas mencionadas en el punto resolutivo que antecede, directamente ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal en turno, por el desacato a una sentencia de amparo, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a fin de que sean juzgadas y sancionadas por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 208 de la Ley de Amparo. CUARTO. Para los efectos mencionados en el último considerando de esta resolución, déjese el presente incidente de inejecución de sentencia abierto y requiérase a los funcionarios que sustituyan en el cargo a las autoridades señaladas en el resolutivo segundo, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos especificados”.

Asimismo informó que el veinticinco de febrero del año en curso se recibieron constancias relacionadas con el cumplimiento y que inclusive, el propio señor Ministro ponente Aguilar Morales solicitó el retiro del referido asunto.

El señor Ministro Franco González Salas manifestó que en relación con el incidente de inejecución de sentencia, listado bajo su ponencia, debían devolverse los autos al Tribunal Colegiado de origen para que éste informara si se

puede considerar que existe un principio de cumplimiento o si efectivamente se ha cumplido con la ejecutoria, con la finalidad de tener certeza sobre lo anterior.

El señor Ministro Aguilar Morales manifestó que de igual manera respecto del incidente de inejecución del que fue ponente, se requiere que se devuelva el expediente al Tribunal o Juzgado de origen, según corresponda, para que se dé vista al quejoso y que éste manifieste si está o no cumplida la sentencia respectiva.

Sometida a votación la propuesta de que los incidentes de inejecución que cuenten con un principio de cumplimiento se remitan al Tribunal Colegiado o al Juzgado de origen para que éste dé vista al quejoso para que manifieste si se encuentra o no cumplida la sentencia respectiva, se aprobó, en votación económica, por unanimidad de votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

En relación con los siguientes incidentes de inejecución el secretario general de acuerdos informó que el veintitrés de febrero del año en curso se recibió un oficio del Tesorero del Distrito Federal. A propuesta del señor Ministro Presidente

*Sesión Pública Núm. 24*

*Lunes 28 de febrero de 2011*

Silva Meza el propio secretario dio lectura a dicho oficio, el cual señala:

“Doctor \*\*\*\*\*, Tesorero del Distrito Federal, en mi carácter de superior jerárquico de las autoridades responsables obligadas al cumplimiento de las ejecutorias de amparo dictadas en los juicios que están siendo substanciados como incidentes de inejecución de sentencia, ante ese Máximo Tribunal, cumplimiento que consiste en DEVOLVER LAS CONTRIBUCIONES Y APROVECHAMIENTOS ORDENADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL FIRME, con la facultad que me confiere el artículo 7º, fracción VIII, inciso b) del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, con el debido respeto me permito señalar lo siguiente:

De conformidad con los artículos 35, fracciones XIV y XXI, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 43 y 73 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, y 107, fracción XVI, párrafo primero, de la Constitución General de la República, ocurro ante usted a efecto de acreditar las acciones efectuadas por el suscrito tendientes a acatar las ejecutorias de amparo materia de los incidentes de inejecución listados en el Pleno de la Suprema Corte, en los términos que se exponen a continuación:

De acuerdo con nuestro Máximo Tribunal, cuando una autoridad responsable del cumplimiento de una sentencia protectora de amparo manifieste la imposibilidad material o jurídica de cumplimentar la ejecutoria de amparo, dicha autoridad tiene derecho a que se le dé oportunidad de demostrar tal extremo en forma fehaciente, con el propósito de que no se impongan las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República.

Establecido lo anterior, es de suma trascendencia para el suscrito externar ante usted que en este momento resulta material y jurídicamente imposible dar cumplimiento a las ejecutorias de amparo materia de los incidentes de inejecución que fueron listados el veintidós de febrero de dos mil once, para sesión del veintiocho siguiente en el Pleno, mediante la devolución en numerario a través de cheque nominativo a favor de los quejosos, según se explica y acredita a continuación:

a) Para el ejercicio fiscal dos mil once, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, autorizó sesenta millones de pesos como partida presupuestal de gasto número 9912, para el pago de devoluciones en materia fiscal, de los cuales, a la fecha no se cuenta con ninguna cantidad disponible para acatar los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

b) En este sentido, al haberse agotado el monto de la partida presupuestal antes referida, se sostiene, que al momento existe imposibilidad material para el suscrito para poder dar cumplimiento a las sentencias de amparo que son materia de los incidentes que se encuentran listados para sesión, mediante la devolución en numerario a través de cheque nominativo a favor de los quejosos.

c) Por otra parte, igualmente existe, en la especie, imposibilidad jurídica para el suscrito a efecto de cumplimentar las sentencia de amparo materia de los incidentes en comento, mediante la devolución en numerario a través de cheque nominativo a favor de los quejosos, toda vez que como lo podrá advertir, el suscrito carece de facultades para ordenar adecuaciones o modificaciones al Presupuesto de Egresos que le permitiesen direccionar recursos a efecto de solventar la devolución de las cantidades a favor de los quejosos.

d) A efecto de acreditar que para el suscrito resultan jurídica y materialmente insuperables los obstáculos que le impiden en este momento dar cumplimiento a las ejecutorias de amparo de los incidentes de inejecución que fueron listados el veintidós de febrero de dos mil once, mediante la devolución en numerario a través de cheque nominativo a favor de los diversos quejosos, es preciso señalar lo siguiente:



De conformidad con el artículo 35, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde al titular de la Tesorería del Distrito Federal recibir y resolver las solicitudes de devolución o compensación de créditos fiscales a favor de los contribuyentes, en los términos y con las modalidades que señalan las leyes fiscales aplicables, así como los Acuerdos del Ejecutivo Federal.

De lo anterior se desprende que las facultades de pago, de aprobación, asignación y ampliación presupuestal recaen en otras áreas, de acuerdo a lo previsto en los artículos 34, fracciones IV y IX, y 92, fracción XX, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y 73 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

Ahora bien, considerando que el monto susceptible a devolver a favor de los contribuyentes, con motivo de las sentencias de amparo de los asuntos que se encuentran listados para sesión del veintiocho de febrero ascienden a trescientos veinticinco punto tres millones de pesos, he solicitado, mediante oficio con número de folio veinticinco, de fecha veintitrés de febrero de dos mil once, ante la Subsecretaría de Egresos, el ajuste correspondiente a la partida presupuestal relativa al cumplimiento de sentencias de amparo fiscal, adjunto para pronta referencia copia del oficio de mérito, anexo uno.

Asimismo, a efecto de acreditar ante ese Máximo Tribunal que a la fecha no se cuenta con ninguna cantidad disponible de la autorizada como presupuesto para acatar los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se adjunta la relación de los cincuenta incidentes en los que se autorizó la devolución, anexo dos, de cuyos importes se puede advertir que, aunado a otras devoluciones de baja cuantía, los sesenta millones de pesos que se autorizaron como partida presupuestal de gasto número nueve mil novecientos doce para el pago de devoluciones, se encuentra agotada.

En estas condiciones, en este momento para el suscrito resulta material y jurídicamente imposible dar cumplimiento a las ejecutorias de amparo de referencia, mediante la devolución en numerario a través de cheques nominativos a favor de los quejosos. Robustece lo anterior, el artículo 126 constitucional que señala: “No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por ley posterior”, cuya interpretación aplica tratándose de las obligaciones de pago derivadas de sentencia de amparo a cargo de las autoridades responsables para que no se sancione su incumplimiento cuando el pago no se encontraba previsto en el Presupuesto autorizado, por lo que la responsabilidad queda limitada a la gestión ante los órganos competentes para que se autorice el gasto correspondiente.

No omito comentar, que para el pago de las devoluciones las autoridades responsables enfrentan la problemática relacionada con la ampliación de recursos a la Partida Presupuestal siempre y cuando haya ingresos excedentes que permitan efectuar dichas ampliaciones.

Por lo anteriormente expuesto, a Usted C. Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atentamente solicito se sirva:

Primero. Tenerme por presentado en mi carácter de superior jerárquico de las autoridades responsables obligadas al cumplimiento de las sentencias firmes relativas a los incidentes de inejecución de referencia, vertiendo las manifestaciones contenidas en el cuerpo del presente escrito, y

Segundo. Se valore la posibilidad de excusar el incumplimiento de las sentencias de amparo por las razones jurídicas y materiales vertidas en el presente, en cuyo caso no deben aplicarse a esta autoridad las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 constitucional.

EL TESORERO DEL DISTRITO FEDERAL”.

*Sesión Pública Núm. 24*

*Lunes 28 de febrero de 2011*

El señor Ministro Presidente Silva Meza precisó que el referido documento cuenta con diversas manifestaciones que debían tomarse en cuenta respecto de la resolución de los incidentes de inejecución listados, así como de la pertinencia de la excusabilidad argumentada debida a la insuficiencia de recursos presupuestarios para cubrir la totalidad de los adeudos, solicitando al secretario general de acuerdos que informara respecto de los asuntos que se manifiesta se han cumplido tienen por cumplidos.

El secretario general de acuerdos informó que los incidentes de inejecución referidos en el citado oficio son los siguientes:

Incidente de Inejecución 1251/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*.

Incidente de Inejecución 755/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 635/2009 promovido del amparo respectivo por \*\*\*\*\*.

Incidente de Inejecución 51/2010 promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 776/2009 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*.

*Sesión Pública Núm. 24*

*Lunes 28 de febrero de 2011*

Incidente de Inejecución 800/2009 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*.

Incidente de Inejecución 936/2009 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 736/2009 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 930/2009 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 999/2009 del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 41/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 97/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*.

Incidente de Inejecución 853/2009 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 932/2009 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

*Sesión Pública Núm. 24*

*Lunes 28 de febrero de 2011*

Incidente de Inejecución 602/2009 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 640/2009 promovido por  
\*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 687/2009 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 627/2009 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 224/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 231/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*.

Incidente de Inejecución 579/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*.

Incidente de Inejecución 1035/2010 derivado del  
amparo promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 535/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

*Sesión Pública Núm. 24*

*Lunes 28 de febrero de 2011*

Incidente de Inejecución 1157/2010. derivado del  
amparo promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 763/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 851/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 883/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 959/2009 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 815/2009 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*.

Incidente de Inejecución 758/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 610/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 746/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 165/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

*Sesión Pública Núm. 24*

*Lunes 28 de febrero de 2011*

Incidente de Inejecución 618/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 941/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*.

Incidente de Inejecución 807/2009 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 254/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*.

Incidente de Inejecución 600/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 617/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 832/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 440/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 661/2009 promovido por  
\*\*\*\*\*



*Sesión Pública Núm. 24*

*Lunes 28 de febrero de 2011*

Incidente de Inejecución 601/2009 promovido por  
\*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 783/2009 derivado del Amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 807/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 203/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 1042/2010 derivado del  
amparo promovido por \*\*\*\*\*.

Incidente de Inejecución 1070/2010 derivado del  
Amparo promovido por \*\*\*\*\*

Incidente de Inejecución 462/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*.

Incidente de Inejecución 563/2010 derivado del amparo  
promovido por \*\*\*\*\*

El señor Ministro Presidente Silva Meza manifestó que el acuerdo de este Tribunal Pleno consiste en la devolución a la autoridad de amparo correspondiente, conforme a los precedentes, para que informe en un plazo no mayor a diez días hábiles respecto del cumplimiento.

El señor Ministro Aguilar Morales precisó que le surgían dudas respecto de los asuntos a los que dio lectura que suman una cantidad de \$59,161,970.99, precisando que en el documento sólo se menciona que de baja cuantía se cuenta con mil doscientos treinta y un asuntos más que importan \$717,194.00 respecto de los que debía tenerse la cantidad que se señala como se hace de los primeros cincuenta, cuestionando si se cuenta con alguna relación respecto de estos mil doscientos treinta y un asuntos, ya que quedaría un remanente presupuestal en la partida correspondiente.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia consideró que dicho remanente se utilizaría para cubrir más de mil asuntos de baja cuantía que no han ingresado a este Alto Tribunal, sino que aún se encuentran en los Tribunales Colegiados respectivos, estimando adecuada la información presentada por el Tesorero, la cual, a petición del señor Ministro Presidente Silva Meza se reflexionará para la próxima sesión.

Por ende, respecto a los incidentes de inejecución antes referidos, integrados a la lista oficial del día de hoy se determinó:

Incidente de Inejecución 635/2009 promovido del amparo respectivo por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO.** Devuélvanse

los autos del juicio de amparo 174/2006-IV al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 51/2010 promovido por  
\*\*\*\*\* **PRIMERO**. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 510/2008 al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 776/2009 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 108/2005 y su acumulado al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 800/2009 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 1306/2008 al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 936/2009 promovido por  
\*\*\*\*\* **“PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 1272/2008-VIII al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 736/2009 promovido por  
\*\*\*\*\* **“PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 1206/2007 al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 930/2009 promovido por \*\*\*\*\* “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 678/2004 al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 999/2009 del amparo promovido por \*\*\*\*\* y otros. “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 1128/2004 al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de

los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 41/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO**. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 201/2008 al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 97/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO**. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 1406/2008 al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el

mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 853/2009 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO**. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 1015/2008 al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 932/2009 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO**. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 451/2007 al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política



*Sesión Pública Núm. 24*

*Lunes 28 de febrero de 2011*

de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 602/2009 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 483/2005 al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 640/2009 promovido por \*\*\*\*\* “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 1212/2007 al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 687/2009 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 29/2005-I al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 627/2009 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\* “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 29/2005-I al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 224/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\* “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 28/2009-VII, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 231/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\* “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 10/2006 al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política

*Sesión Pública Núm. 24*

*Lunes 28 de febrero de 2011*

de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 579/2010 promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 57/2009 al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 1035/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\* y otra. “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 779/2009-III al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del

artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 535/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 1535/2008-VIII al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 1157/2010. derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\* “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 1643/2004 al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el

presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 763/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 1150/2009 al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 851/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\* “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 1371/2008 al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se

pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo.

**SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 883/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\* **“PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 802/2009 al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 959/2009 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\* **“PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 848/2005 al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para

que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución.”

Incidente de Inejecución 815/2009 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO**. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 871/2007 al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 758/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO**. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 218/2005-III al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para



que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 610/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO**. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 1090/2008 al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 746/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO**. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 1151/2007 al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una

vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 165/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO**. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 466/2008 al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 618/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO**. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 1752/2008 al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal,

para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 941/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO**. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 1862/2004 al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 807/2009 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO**. Devuélvanse los autos

del juicio de amparo 1366/2008 al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 254/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO**. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 1625/2008 al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 600/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 236/2009 al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 617/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 534/2008 al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

*Sesión Pública Núm. 24*

*Lunes 28 de febrero de 2011*

Incidente de Inejecución 832/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\* “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 2084/2008 al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 440/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\* “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 766/2009 al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

*Sesión Pública Núm. 24*

*Lunes 28 de febrero de 2011*

Incidente de Inejecución 661/2009 promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 308/2004-II al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 601/2009 promovido por \*\*\*\*\* “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 530/2007 al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 783/2009 derivado del Amparo promovido por \*\*\*\*\* “**PRIMERO**. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 1240/2008 al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 807/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\* “**PRIMERO**. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 1378/2008 al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.



*Sesión Pública Núm. 24*

*Lunes 28 de febrero de 2011*

Incidente de Inejecución 203/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\* “**PRIMERO**. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 2068/2008-III al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 1042/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\* “**PRIMERO**. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 1423/2008 al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de

los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 1070/2010 derivado del Amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO**. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 1375/2008 al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 462/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO**. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 1859/2008-VIII al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO**. Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el

*Sesión Pública Núm. 24*

*Lunes 28 de febrero de 2011*

mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

Incidente de Inejecución 563/2010 derivado del amparo promovido por \*\*\*\*\*. “**PRIMERO.** Devuélvanse los autos del juicio de amparo 93/2009 al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, para que una vez que se dé vista a la parte quejosa se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo; y, **SEGUNDO.** Queda en suspenso el presente incidente de inejecución de sentencia respecto de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el mencionado Juzgado informe sobre el cumplimiento mencionado, lo cual deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución”.

El señor Ministro Silva Meza declaró que los asuntos se resolvieron en los términos precisados, debiéndose tramitar a la brevedad por la secretaría general de acuerdos, convocó a los señores Ministros para la sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el martes primero de marzo del año en curso, a las diez horas con treinta minutos y concluyó la sesión a las trece horas con cuarenta minutos.

*Sesión Pública Núm. 24*

*Lunes 28 de febrero de 2011*

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.